

La perspectiva agroalimentaria

Emilio Romero Polanco *

La estructura agroalimentaria de México, muestra en sus distintos eslabones un abigarrado marco de heterogeneidad y una relación polarizada y asimétrica entre los diferentes agentes que en ella participan. En su interior coexisten amplios sectores que muestran signos de atraso -como las precarias unidades de producción campesina-, un intermediarismo excesivo y un vasto espectro de empresas familiares atomizadas y descapitalizadas; también está presente un dinámico y moderno sector empresarial que difunde un modelo alimentario altamente elitista ajeno a las necesidades reales del país y a las posibilidades económicas y tradiciones culturales de la mayoría de la población mexicana.

La adopción de un modelo alimentario originado en las condiciones propias de los países altamente industrializados del mundo capitalista occidental, ha chocado con las características productivas, socioeconómicas y culturales que prevalecen en nuestros países.

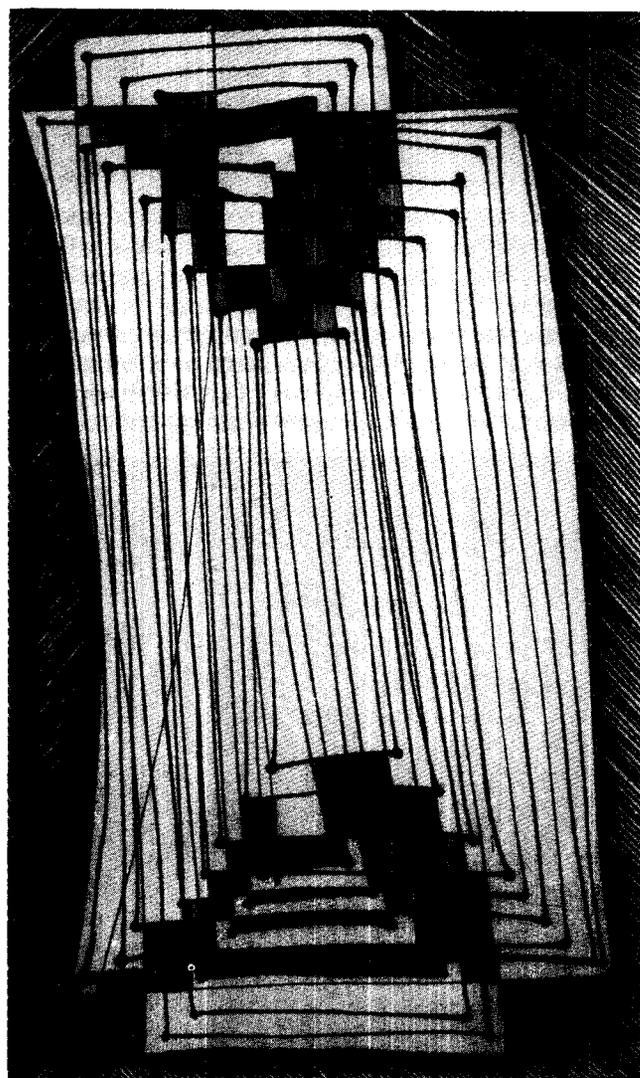
En una investigación realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sobre los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, se observa que el patrón alimentario fomentado por las grandes empresas agroalimentarias nacionales y transnacionales, traslada a nuestra región formas de consumo caracterizadas por: un alto nivel energético y proteico; un porcentaje creciente de proteínas; un acelerado incremento de productos industrializados altamente diferenciados y la difusión masiva por medios publicitarios.¹

En este estudio se señala que el modelo adoptado se dio de una manera prematura, sobre todo considerando las diferencias de los ingresos medios muy inferiores observadas en nuestros países. A diferencia de la producción de masas que presenta la producción alimentaria y agroindustrial en el modelo dominante, en nuestros países ésta fue destinada como consumo de sectores minoritarios. El modelo adoptado fomentó el desplazamiento de los patrones de consumo tradicionales que son más coherentes con nuestras dotaciones de recursos naturales existentes. También se observa que "la masificación del modelo que se imita resulta imposibilitada, por los niveles de ingreso que supone, por su costo en divisas y porque la energía comercial (combustibles y otros) requerida por unidad calórica en dicho patrón es tal, que su presencia sólo

puede sostenerse en la medida en que la adopción se reduzca a un sector minoritario."²

La búsqueda de alternativas para solucionar los problemas alimentarios y nutricionales de la población mexicana, dada la complejidad de factores involucrados, no puede desvincularse de la necesidad más global de solucionar la crisis económica y financiera del país y recuperar el crecimiento económico y los niveles de vida de la población mexicana.

² *Ibidem.*, p. 21.

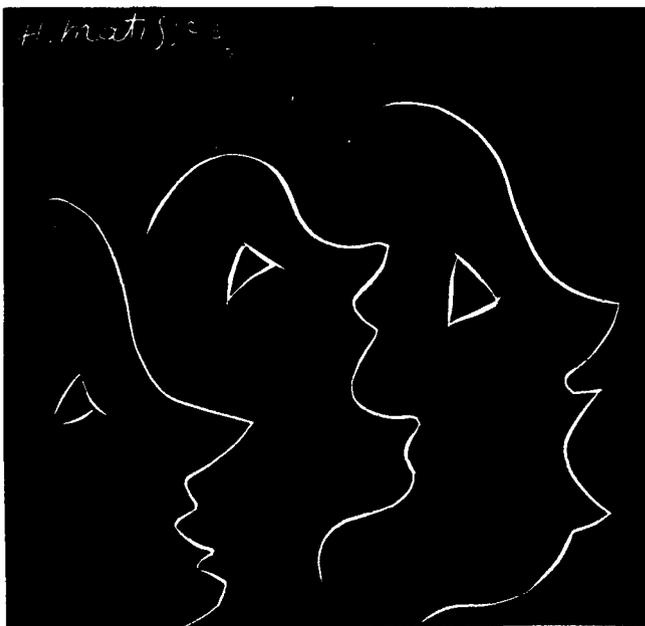


* Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.

¹ Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, *Sistema alimentario y seguridad alimentaria, Anexo III*, Roma, 1988.

En la actual coyuntura nacional, ninguna estrategia de desarrollo puede tener perspectivas de éxito, mientras no se solucione el problema de la deuda externa. La esclavitud financiera a que han sometido a naciones como México los países y bancos acreedores implica una descapitalización sistemática de magnitudes tales que imposibilitan la reactivación productiva y comercial del país. Durante los últimos años se privilegió el pago de los servicios de la deuda, a costa del crecimiento económico y del bienestar social. Se necesita emprender negociaciones firmes que antepongan los intereses del país y del pueblo mexicano frente a las ganancias especulativas de los acreedores.

Aunque una solución del problema de la deuda es una necesidad nacional primaria e impostergable, por sí sola no basta para remover los obstáculos estructurales económicos y sociales que han estimulado la permanencia de la crisis. Se requiere reformular las estrategias impulsadas durante las últimas décadas y rescatar el concepto de desarrollo económico: la recuperación de los ritmos de crecimiento, la modernización tecnológica y la competitividad del aparato económico para tener bases sólidas, deben contribuir y apoyarse en el mejoramiento del bienestar social del pueblo mexicano. La postración del mercado interno nacional, indica la necesidad de instrumentar políticas de desarrollo que involucren como un aspecto central: la generación de empleos y la redistribución del ingreso en beneficio de las mayorías nacionales.



La solución del problema alimentario nacional, sólo puede realizarse en un contexto de mejores niveles de ingreso y seguridad social de la población que le garanticen acceso a condiciones más adecuadas y dignas de salud, vivienda, educación, etc. Se requiere actuar coherentemente en todas las instancias involucradas en la situación alimentaria nacional: producción primaria, transformación industrial, distribución y consumo.

Una estrategia alimentaria debe garantizar la disponibilidad de la oferta y la distribución de los alimentos entre los distintos sectores de la población, en función de las necesidades sociales y no sólo de la demanda efectiva.

El combate a la desnutrición y el acceso de todos los mexicanos y particularmente de los niños a los nutrientes básicos indispensables para su sano desarrollo, no debe ser visto meramente como una labor asistencial, ya que una correcta alimentación de la población puede jugar un papel por la vía de la demanda, de estímulo para el crecimiento económico de las actividades primarias y la industria alimentaria.

Una estrategia de desarrollo basada en políticas redistributivas del ingreso nacional y en la consolidación del mercado interno, bien puede encontrar en la expansión y modernización del sector agroalimentario a uno de sus pivotes dinamizadores: la industria alimentaria es sensible a los cambios de la demanda; sus menores coeficientes de capital y de insumos importados amplían la oferta de empleos y generan menos problemas de divisas y es un sector en donde la presencia del capital extranjero es menor en términos relativos. El estímulo a la organización de los productores, la asistencia técnica, mejores canales de abasto y comercialización y el acceso a créditos a tasas de interés razonables para las pequeñas y medianas empresas y las microindustrias familiares deben ser una prioridad de las políticas de fomento industrial.

La reactivación productiva del sector agropecuario en general y de la producción de alimentos en particular, debe ser parte de una estrategia que rescate la autosuficiencia y la seguridad alimentaria nacional, que por sus implicaciones no es sólo un problema económico sino también social y político. Parte de los recursos financieros que actualmente se destinan al pago de la deuda deben ser canalizados hacia la inversión productiva en el agro. El incremento de los bajos niveles actuales de inversiones públicas para obras de infraestructura, créditos y precios de garantía remunerativos en el campo es urgente.

Los sectores mayoritarios de campesinos pobres, las zonas temporaleras y la producción de alimentos deben transformarse en los centros de atención de la política

agroalimentaria nacional. Más importante que la elaboración de planes sofisticados, es la voluntad política del Estado por elevar la capacidad de organización y autogestión económica de los productores y el respeto a su autonomía. Es de particular trascendencia difundir el uso de tecnologías adecuadas a la realidad económica y tradiciones productivas de los productores de escasos recursos, así como estimular su organización para la comercialización más eficiente y justa de sus productos. El fomento a la creación de agroindustrias rurales, incrementa el agregado de los productos campesinos y genera empleos que se traducen en mejores condiciones de vida de la población rural. El fomento y mejoramiento de la ganadería criolla y de otras especies de ganado menor, ayudan a mejorar los ingresos de las familias campesinas y les proporciona una alimentación más rica y diversificada al consumir carne, leche, huevos, quesos, etc.

En la medida que amplios sectores de la población rural pobres están compuestos por jornaleros sin tierra, una política de acceso a niveles adecuados de nutrición y bienestar debe considerar la necesidad de inducir al capital privado a generar mayores empleos y promover legislaciones que garanticen el respeto a los derechos laborales y sindicales de los asalariados rurales, modernizando y reglamentando más estrictamente las relaciones obrero-patronales en el mercado de trabajo rural.

Los incrementos de la producción primaria de alimentos, aunque importantes, no son suficientes para garantizar una dieta adecuada de la población, ya que además de poder adquisitivo, se necesita la presencia de mecanismos eficaces de distribución que permitan el acceso de toda la población al consumo de alimentos. Es de particular im-

portancia incidir en una estructura de abasto y comercialización de alimentos atrasada, insuficiente y mal localizada que además genera fenómenos de intermediarismo excesivo que fomentan la especulación y el desabasto, e incrementan los precios en detrimento de los productores y consumidores.

El fomento de la organización y competitividad de los agricultores, pequeños empresarios, comerciantes detallistas, debe ser el punto de partida de la modernización de este sector. Lo anterior se complementa con el fortalecimiento comercial del sector social (tiendas sindicales, cooperativas de consumo, etc.), y con la presencia reguladora del Estado en materia de abasto, transformación, comercialización y distribución de alimentos. La importancia vital del problema alimentario justifica el uso de los subsidios a los precios de producción o venta con el objeto de asegurar el abasto y consumo de nutrientes a la población nacional y en particular de los grupos más vulnerables.

Las campañas de información, orientación y educación nutricional entre la población deben intensificarse al igual que las instituciones y procuradurías de protección al consumidor. Es de particular importancia vigilar y reglamentar las nocivas campañas publicitarias que fomentan el consumo masivo de alimentos "chatarra" que provocan hábitos de consumo nocivos para la nutrición y salud de la población.

Es urgente disponer de sistemas de información nacionales, regionales y locales que permitan conocer objetivamente la problemática nutricional en el país; su monitoreo y vigilancia son instrumentos claves para la toma de decisiones y diseño de políticas alimentarias.

